



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA**

Popayán, doce (12) de agosto de dos mil quince (2015).

Magistrado Ponente: **DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO**

Expediente           **19001-33-31-008-2015-00216-01**  
Actor               **PEDRO HERNÁNDEZ CASTILLO**  
Demandado       **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-UNIVERSIDAD  
DEL CAUCA**  
Acción              **TUTELA-SEGUNDA INSTANCIA**

**SENTENCIA N° 170**

**I.- OBJETO A DECIDIR**

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el accionante, contra la Sentencia No. 124 de 23 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán.

**I. ANTECEDENTES**

**1.1.- La Demanda<sup>1</sup>.**

El señor PEDRO HERNÁNDEZ CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.158.623, presentó acción de tutela actuando como presidente y representante legal de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –ASPU-, coadyuvada por la señora GLORIA CECILIA ARBOLEDA, identificada con cédula 34.525.009, con el propósito que sean tutelados los derechos de asociación sindical, libertad sindical, negociación colectiva, debido proceso y defensa.

En consecuencia, solicitó se tutelén los derechos anteriormente mencionados y se ordene a la Universidad del Cauca, dejar sin efectos la Resolución Rectoral R-951 de 2014 y Resolución Superior 024 del Consejo Superior de 20 de mayo de 2014. Asimismo, solicita se restablezcan las garantías del permiso sindical de la profesora Gloria Cecilia Arboleda, respetando la labor asignada a ella en el Departamento de Derecho Laboral de la Universidad del Cauca y que en adelante, solo se modifique o afecte el permiso sindical de la docente a través de la negociación o concertación con el sindicato ASPU.

**1.2. Hechos.**

Los hechos constitutivos de la presente acción se sintetizan así:

---

<sup>1</sup> Folios 1 a 22

Señalan que la Asociación Sindical de Profesores ASPU, es un sindicato nacional gremial de primer grado que agrupa a profesores de las Universidades y de las Instituciones de Educación Superior de Colombia, el cual tiene afiliados a profesores de la Universidad del Cauca y cuenta con una junta directiva seccional.

Que la doctora Gloria Cecilia Arboleda, es docente de la Universidad del Cauca y se encuentra afiliada al sindicato; que en el año 2003 fue elegida como integrante de la Junta Directiva Nacional y ha sido reelegida en los años posteriores.

Aducen que mediante Resolución DRH-0435 de 2003, se concedió permiso sindical a la profesora Gloria Cecilia Arboleda, de 12 horas semanales para realizar trabajo de investigación y 28 horas para realizar las actividades propias de la dirección sindical nacional.

Que dentro del proceso de negociación colectiva adelantado en el 2013 con la administración actual, la Universidad ratificó los acuerdos logrados, mejoró en 2 horas semanales el permiso sindical concedido a las directivas de la seccional de ASPU y se obligó a conceder permisos remunerados a los profesores miembros del sindicato; acuerdos que fueron implementados mediante Resolución 321 de 2015.

Manifiesta que el permiso sindical concedido a la doctora Gloria Cecilia Arboleda, siempre estuvo acompañado de actividades académicas en el *Alma Mater*, asignándosele labores en el campo de la investigación y orientación de módulos en la asignatura de Seguridad Social, cuando se le ha requerido; participando igualmente en eventos de planeación académica administrativa, presentación de informes, entre otros.

Que sin que mediara solicitud formal o antecedente que permitiera a la profesora o al sindicato realizar alguna aclaración, la Universidad del Cauca, expidió la Resolución de rectoría R-951 de 2014, en la cual se decidió suspender el permiso sindical a la profesora, decisión que según señala, equivale a una revocatoria directa.

Que no existe prueba de que con la ausencia de la profesora Arboleda se esté afectando el funcionamiento o servicios que debe prestar a la Universidad, ni prueba de una necesidad del servicio insuperable; por lo que aduce, no existen razones del servicio en la revocatoria del permiso sindical llamada "suspensión".

Expresa que contra la Resolución rectoral R-951 de 2014, se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto y confirmado por el Consejo Superior de la Judicatura el 20 de mayo de 2015.

Que atendiendo a una comunicación enviada por el rector de la Universidad, donde se solicitaba una propuesta de concertación sobre el permiso sindical, se desplazó el viernes 15 de mayo hasta Popayán, para proponer tal concertación, reunión que fue llevada a cabo en el Despacho del señor

rector donde se presentó una propuesta de manera verbal y que posteriormente se reiteró de manera escrita.

## 1.2.- Pruebas aportadas con la demanda

- Copia “Constancia de Depósito cambio Junta Directiva” del Ministerio de Trabajo de 23 de noviembre de 2014, donde se indica que la señora Gloria Cecilia Arboleda ostenta el cargo de Secretaria General. (Fl. 23)
- Copia certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical de 17 de febrero de 2015, señalando que la señora Gloria Cecilia Arboleda ostenta el cargo de Secretaria General. (Fl. 24)
- Copia Resolución DHR-0435 de 2003, por la cual se autoriza un permiso sindical remunerado a la docente universitaria Gloria Cecilia Arboleda Fernández. (Fl. 25)
- Copia Resolución 0351 de 03 de diciembre de 2014, por la cual se decide suspender el permiso sindical concedido a la docente Gloria Cecilia Arboleda Fernández. (Fl. 26)
- Copia oficio dirigido al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, poniendo en conocimiento el trabajo realizado en el 2013 por la docente Arboleda Fernández, suscrito por señor Pedro Hernández Castillo, Presidente Nacional de ASPU. (Fl. 27)
- Copia de acta general para actividades universitarias donde se trata el tema de la situación de la profesora Arboleda Fernández, entre otros. Suscrita por Harold Mosquera Rivas y Marisol Muñoz Ordóñez. (Fl. 32)
- Copia recurso de reposición contra la Resolución R-951 de 03 de diciembre 2014. (Fl. 32-36)
- Copia Resolución superior No. 024 de 20 de mayo de 2015, donde se confirma en todo su contenido la Resolución Rectoral 951 de 03 de diciembre de 2014. (Fl. 37-40)
- Copia Resolución No. 207 de 17 de marzo 2015, la cual se resuelve “Ratificar el concepto de evaluación SATISFACTORIA del año académico de experiencia calificada laborado en la Universidad del Cauca por el (la) profesor(a) GLORIA CECILIA ARBOLEDA FERNÁNDEZ de TIEMPO COMPLETO en la categoría de ASOCIADA.” (Fl. 41)
- Respuesta de ASPU a la comunicación rectorial de 25 de abril de 2015, sobre el permiso sindical de la profesora Gloria Cecilia Arboleda. (Fl. 42-43)
- Copia Resolución 264 de 20 de abril de 2012, donde se ratifica los acuerdos logrados en el proceso de negociación colectiva entre la Universidad del Cauca y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-Cauca, suscrita por el señor Danilo Reinaldo Vivas. (Fl. 44 y reverso)
- Copia Resolución 321 de 23 de abril de 2015, la cual ratifica el acta final de negociación colectiva de empleados públicos suscrita en la Universidad del Cauca y ASPU Cauca, suscrita el 25 de octubre de 2013.
- Copia documento acuerdos de la negociación colectiva de empleados públicos entre la Universidad del Cauca y la Asociación Sindical de



Profesores Universitarios Seccional Universidad del Cauca-ASPU Cauca, sin firma de ninguno de los que aparece en el acta (Fl. 46-49)

- Documento de acuerdos logrados dentro del proceso de negociación colectiva ASPU-Universidad del Cauca, de 13 de abril de 2012 (Fl. 50-52)
- Copia respuesta a solicitud concepto sobre permiso sindical dirigido a Gloria Cecilia Arboleda, realizado por Harold Mosquera Rivas, Jefe de Departamento de Derecho Laboral de la Universidad del Cauca. (Fl. 53-54)
- Copia oficio dirigido al Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias, Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, suscrito por la docente Gloria Cecilia Arboleda. (Fl. 55-56)

## **2.- EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA<sup>2</sup>.**

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia proferida el 23 de junio de 2015, declaró improcedente la presente acción de tutela.

Como argumento señala que si bien el la acción de tutela procedía de forma transitoria para la protección de derechos fundamentales cuando sean vulnerados por actos administrativos ante la presencia de un perjuicio irremediable, en la actualidad el ordenamiento jurídico colombiano consagra instrumentos judiciales provisionales que resultan igualmente eficaces para lograr ese fin, como lo son las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011;

Concluye que el juez natural para dirimir el conflicto que hoy se presenta, es el juez contencioso administrativo y que no se precisa de la intervención del juez constitucional pues existe otro mecanismo para discutir el acto administrativo por el cual se decidió suspender tal permiso.

Que si en gracia de discusión fuera procedente el mecanismo de forma transitoria, se tiene que el permiso sindical que hace parte de los derechos de libre asociación y libertad sindical, éste consagra una duración periódica según el Decreto 2813 de 2000, sin que se afecte además la prestación del servicio.

## **3.- LA IMPUGNACIÓN.**

Si bien es cierto, existe un escrito de impugnación en el cual se aduce actuar en nombre de la señora Gloria Cecilia Arboleda conforme al poder conferido (Fl. 127-144), advierte la Sala que no obra dentro del expediente poder otorgado al abogado Camilo Andrés Valderrama Castillo por parte de la señora Gloria Cecilia Arboleda.

Que si bien existe a folio 125 un poder, éste fue otorgado por el señor PEDRO HERNÁNDEZ CASTILLO; por lo tanto, el abogado Camilo Valderrama carece de legitimidad para sustentar el recurso de apelación

---

<sup>2</sup> Folios 115 a 122

interpuesto a nombre de la señora Arboleda Fernández, pues quien manifieste actuar en nombre de otra persona, debe probar el mandato judicial conferido, a través del poder expresamente otorgado para el efecto. Se observa de igual manera, que los argumentos presentados son similares a los presentados en el escrito de tutela.

A pesar de lo anterior, se observa que en la diligencia de notificación personal de la señora Gloria Cecilia Arboleda, ella manifestó impugnar la decisión; por tal motivo, se dará trámite al presente recurso de alzada.

## II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

### 1. LA COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela según lo establecido por el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, en **segunda instancia**.

### 2. EL PROBLEMA JURÍDICO

En el caso objeto de análisis, el problema jurídico radica en determinar:

¿Debe confirmarse o revocarse el fallo de tutela proferido el 23 de junio de 2015?

Para dar solución al problema planteado la Sala abordará los siguientes temas: i) Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) Principio de Subsidiariedad; iii) Derecho de asociación sindical – Permisos sindicales.

#### i) Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos

El artículo 86 de la Constitución Política prevé la acción de tutela como un mecanismo constitucional para la defensa inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La misma norma dispone que ese instrumento de amparo sea de carácter subsidiario y residual, lo que significa que procede solo en los casos en que el ciudadano no cuente con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos.

A pesar de lo anterior, la citada disposición establece una excepción a dicho carácter subsidiario, al señalar que la acción de tutela sería procedente, aun cuando el accionante cuente con otra vía judicial, en los casos en que se instaure como *mecanismo transitorio* para evitar un perjuicio irremediable<sup>3</sup>. Asimismo, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 adiciona otra excepción según la cual la acción de tutela es procedente cuando el

<sup>3</sup> La jurisprudencia de la Corte ha señalado que un perjuicio se considera irremediable cuando: “de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente —esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos—, (b) grave, desde el punto de vista del bien o intereses jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consuma un daño antijurídico en forma irreparable”. Ver sentencias, T-1316 de 2011, T-494 de 2010, T-232 de 2013, entre muchas otras.

mecanismo no sea eficaz, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

En ese sentido, es preciso que los jueces constitucionales estudien las particularidades propias de cada caso concreto para determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial alternativo, más allá de la simple existencia del mismo y sin olvidar que con ello no puede suplantarse la competencia del juez ordinario. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:

*“Sin embargo, y con el primordial objetivo de preservar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo de protección jurídica de los derechos fundamentales, en numerosas ocasiones y de manera constante se ha manifestado por la jurisprudencia constitucional que **es necesario realizar un análisis sustancial, y no simplemente formal, al evaluar la existencia de mecanismos ordinarios para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado.** En este sentido se ha insistido en que dicha evaluación **no debe observar únicamente que el ordenamiento prevea la existencia de recursos o acciones para la solución por la vía jurídica de determinada situación, sino que en el contexto concreto dicha solución sea eficaz en la protección del derecho fundamental comprometido**”<sup>4</sup>*  
(Negrita fuera de texto).

Así entonces, la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto, la Corte Constitucional y esta Corporación han puntualizado que, en principio, es improcedente, en tanto la persona cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Incluso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé en sus artículos 229 y siguientes la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo para evitar la vulneración de los derechos fundamentales.

No obstante, se ha sostenido que, de manera excepcional, la tutela procede contra los actos de dicha naturaleza bajo dos supuestos: (i) como mecanismo transitorio, en los eventos en que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y (ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción judicial ordinaria no sea idónea o eficaz para la protección de los bienes jurídicos en juego.

## ii) Principio de Subsidiariedad

En cuanto al Principio de Subsidiariedad la Corte Constitucional ha señalado:

*“(…) **si el afectado tuviera a su disposición otros mecanismos judiciales que resultaren eficaces para la protección que reclama, es su deber acudir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela.** Así las cosas, la subsidiariedad implica que el accionante agote previamente los medios de defensa legalmente disponibles para proteger los derechos, pues **la tutela no puede desplazar los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, ni tampoco servir de herramienta procesal extraordinaria y adicional de los diferentes procesos judiciales, cuando al interior de éstos, las oportunidades para interponer los recursos ya prescribieron**”<sup>5</sup>.* (Negritas de la Sala)

<sup>4</sup> Sentencia T-235 de 2012.

<sup>5</sup> Sentencia T-958 de 2012



De esta manera, el principio de subsidiariedad indica que esta acción es procedente cuando el demandante considere que se le han vulnerado sus derechos fundamentales y no encuentre otro mecanismo de defensa, a menos que la acción sea usada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la jurisprudencia señalada, la Sala procederá a determinar si la acción de tutela *sub examine* cumple con los presupuestos generales de procedibilidad del amparo constitucional y/o con los requisitos especiales de la acción de tutela como mecanismo transitorio, a fin de decidir si es procedente el amparo de la acción tutelar.

### iii) Derecho de asociación sindical – Permisos sindicales.

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado sobre el derecho de asociación sindical y los permisos sindicales como garantía para su ejecución. Este derecho fundamental ha sido definido como

*“la facultad con la que cuentan tanto trabajadores como empleadores para conformar sindicatos o asociaciones de manera libre y voluntaria, es decir, sin intervención del Estado, teniendo por finalidad la efectiva realización de valores fundamentales de la sociedad, tales como el trabajo, la justicia social, la paz, la libertad y la convivencia”<sup>6</sup>.*

Adicionalmente, ha señalado la Corte que el derecho de asociación consiste *“en la libre voluntad que tienen todos los trabajadores para constituir organizaciones permanentes que los identifiquen y los una en una sola causa, para la defensa de los intereses comunes que demande la respectiva profesión u oficio a la cual se dediquen, sin autorización previa, y ajena a toda intromisión del Estado o intervención de sus empleadores”<sup>7</sup>.*

Dentro de lo que el artículo 39 de la Constitución Política denomina *“garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión de los representantes sindicales”*, se encuentran los llamados permisos sindicales, considerados como uno de los instrumentos que permite la ejecución y el desarrollo del derecho de asociación sindical<sup>8</sup>.

En ese sentido ha dicho la Corte Constitucional:

*“Lo anterior está ligado a la obligación del empleador de permitir a sus trabajadores sindicalizados, en especial a aquellos que hacen parte de las directivas de la organización o fungen como representantes, desarrollar sus labores otorgando los permisos solicitados con el fin de hacer posible el verdadero ejercicio de la actividad sindical, siempre y cuando los mismos sean concedidos dentro de los límites razonables, sean proporcionales y consulten a un criterio de necesidad; es decir, que solo puedan ser solicitados cuando se requieran con ocasión de las actividades sindicales que ameriten el reconocimiento, a los representantes de la organización*

<sup>6</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-464 de 2010.

<sup>7</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2012.

<sup>8</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 1998.

*sindical, del tiempo necesario para que adelanten las gestiones tendientes al funcionamiento del sindicato<sup>9</sup>*

En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de los permisos como una de las garantías que hacen viable el ejercicio del derecho a la asociación sindical, específicamente, para el cumplimiento de la gestión de los representantes sindicales, en tanto permiten desarrollar a cabalidad las actividades por las cuales fue instituida la organización.

### 3. EL CASO CONCRETO

En el escrito de tutela se relata que a la docente universitaria Gloria Cecilia Arboleda, integrante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU-, fue elegida parte de la junta directiva de ésta; por lo cual, la Universidad del Cauca, otorgó en el año 2003, permiso sindical equivalente al 70% del tiempo hábil laboral para que ejerciera las funciones sindicales.

Que sin mediar requerimiento alguno o precedente de afectación del servicio, mediante resolución, el ente universitario a través de su rector decidió, según afirman, revocar el permiso sindical otorgado a la docente; decisión que fue confirmada por el Consejo Superior de la Universidad.

El Juzgado Octavo Administrativo de Popayán declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Pedro Hernández Castillo como representante legal de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU- y la señora Gloria Cecilia Arboleda, al considerar que la misma estaba encaminada a controvertir un acto administrativo, para lo cual existe otro mecanismo de defensa judicial. Asimismo, señaló que en gracia de discusión, se tiene que el permiso sindical que hace parte de los derechos de libre asociación y libertad sindical, debe consagrar una duración periódica según el Decreto 2813 de 2000.

Revisado el escrito de tutela así como el material probatorio allegado al expediente la Sala se permite realizar las siguientes consideraciones:

En el presente caso, se observa, que lo que se discute es la legalidad de un acto administrativo, lo que podría, *prima facie*, hacer concluir que la presente acción se torna improcedente por contar con otros mecanismos de defensa judicial, tal como lo consideró la *a quo*.

A pesar de lo anterior, es preciso resaltar, que la acción de tutela contra actos administrativos, excepcionalmente procedente cuando se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable.

En ese sentido, observa la Sala que si bien el acto administrativo por el cual se **suspendió** el permiso sindical de la profesora Gloria Cecilia Arboleda, se motiva en el sentido de señalar que éste no se ajusta a las normas, la jurisprudencia, la doctrina y las negociaciones colectivas suscritas por ASPU

<sup>9</sup> Sentencias T-502 de 1998, T-988A de 2005, T-740 de 2009, C-930 de 2009, T-464 de 2010 y T-435 de 2011, entre otras.



y el ente universitario; se advierte que como lo señalan los actores, esta suspensión no obedeció a ningún preaviso formal o a antecedente de afectación del servicio, y solo una vez realizada la suspensión, la Universidad del Cauca, procedió a proponer una concertación sobre el permiso otorgado a la docente, para poder expedir el acto administrativo con el cual se materialice el permiso (Fl. 110).

De ahí que, al realizarse tal suspensión de manera repentina e imprevista, la asociación sindical no pudo realizar ninguna actuación para que ésta no afectara el normal funcionamiento de la organización sindical, lo que hace concluir que se configura un perjuicio irremediable al desenvolvimiento del sindicato; puesto que, al no contar con uno de sus dirigentes para realizar las labores sindicales propias del cargo, se ve afectado gravemente el derecho de asociación sindical, y como tal, objeto de protección y respeto. Se afecta el cronograma de actividades previsto.

En conclusión, al configurarse un perjuicio irremediable como se estableció en líneas anteriores, para esta Corporación el presente mecanismo de protección constitucional resulta procedente, por lo tanto, se pasará a analizar el fondo del asunto.

El derecho de los trabajadores a organizar y constituir sindicatos reviste cardinal importancia en el mundo laboral, pues les permite unirse con el fin de defender sus intereses y hacer efectivas sus garantías, obteniendo así el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, el reconocimiento de nuevos beneficios y la reivindicación de prerrogativas emanadas de la Constitución, los convenios internacionales, la ley y los acuerdos celebrados con los empleadores.<sup>10</sup>

El artículo 39 de la Constitución Política colombiana lo consagra en los siguientes términos:

*“Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.*

*La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.*

*La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.*

*Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.*

*No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.”*

Las garantías para el adecuado ejercicio de este derecho, no sólo se circunscribe a la libertad de formar organizaciones sindicales, sino al reconocimiento de un fuero y las demás garantías para su gestión, dentro de las cuales se encuentran los permisos sindicales, a efectos de no convertir

<sup>10</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-311 de mayo 3 de 2007.

este derecho en un simple enunciado retórico para quienes de una u otra forma tengan un vínculo laboral con el Estado<sup>11</sup>.

En tratándose de servidores públicos, la única posibilidad de negar o limitar los permisos sindicales, es que se demuestre que con tal, se afecta el funcionamiento de la entidad a la que pertenece el directivo sindical.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, no se encuentra que exista una afectación al servicio que presta la docente, pues como se afirma, realizaba labores en el campo de investigación y la orientación de algunos módulos en el área de seguridad social, aseveración que no fue desvirtuada por la accionada.

Entonces, toda vez que que la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, entre ellos el de asociación sindical, éste puede ser empleado para obtener del juez constitucional, una orden tendiente a que cesen conductas que impidan u obstaculicen su ejercicio, y una forma de impedir o restringir este derecho, es negando o limitando los permisos sindicales.

Además, se encuentra que la Asociación Sindical, solicitó una reunión con las directivas del ente universitario con el fin de concertar nuevamente el permiso sindical de la actora, a lo que la accionada respondió que no era posible realizarse puesto que era la última semana del semestre y que por tanto, los funcionarios encargados de atender dicha reunión tenían compromisos indelegables no disponiendo del tiempo para atender ésta (Fl. 113).

Lo anterior, contraría a todas luces lo contenido en el Decreto 2813 de 2000, en el cual se dispuso que las entidades públicas deben atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos; agravando aún más la situación de los actores.

Por otra parte, se observa que uno de los argumentos por los cuales la Universidad decidió suspender el permiso de la docente, se fundamenta en una respuesta dada por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo<sup>12</sup>, informando que el nombre de la doctora Gloria Cecilia Arboleda no aparece en los depósitos de junta directiva.

Revisado el expediente, se advierte que en el oficio se indica que *“en los depósitos de junta directiva no aparece el nombre de la persona que referencia en su solicitud. Sin embargo aparece en la elección de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas la cual adjunto en dos folios, también adjunto constancia de depósito actual de la junta directiva ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU”*. (Fl. 111),(Subraya la Sala)

<sup>11</sup> Corte Constitucional. Sentencia 502 de 1998.

<sup>12</sup> Oficio 194466 de 10 de noviembre de 2014.



Además, como se indicó en el acápite de pruebas, existe “Constancia de Depósito Cambio Juntas Directivas” de 23 de noviembre de 2012, en la cual se señala como integrante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, a la señora Gloria Cecilia Arboleda con documento de identidad 34.525.009, en el cargo de Secretaria General. (Fl. 23)

Igualmente, se encuentra certificación proferida por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical, del 17 de febrero de 2015, donde se señala “*Que la Junta Directiva **PRINCIPAL** de la citada Organización Sindical (entiéndase ASPU) que se encuentra en el expediente es la **DEPOSITADA** mediante CONSTANCIA DE DEPÓSITO número JD-419 del 23 de noviembre de 2012, proferida por la Inspección de Trabajo de la Dirección Territorial de Trabajo de Cundinamarca, la cual quedó conformada así: (...) SEG (sic) GENERAL GLORIA CECILIA ARBOLEDA*” (Fl. 24)

Lo anterior, demuestra que se realizó una interpretación errónea de la respuesta dada por el Ministerio de Trabajo, teniendo entonces un argumento inexistente para proceder a suspender el permiso sindical de la docente, pues como se expresa, ella sí hacía parte de la Junta Directiva de la Asociación Sindical desde el año 2012.

En consecuencia, existe una violación al debido proceso administrativo, toda vez que la motivación del acto de suspensión, carece de sentido al encontrarse acreditado que la señora Gloria Cecilia Arboleda hacía parte de la Junta Directiva y no como el ente universitario lo sostuvo.

En este sentido, la Corte Constitucional ha expresado que la correcta motivación de los actos, entre otros, conforman la noción de debido proceso, entendiéndose este como la regulación jurídica que limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley<sup>13</sup>.

De acuerdo con estas consideraciones, dado que se observa que con la suspensión del permiso se está obstaculizando el normal ejercicio del derecho sindical y existe una violación al debido proceso por una incorrecta motivación del acto administrativo, esta Sala revocará la sentencia impugnada y tutelaré el derecho de asociación, libertad sindical, negociación colectiva y debido proceso, aducidos por los actores.

En vista de lo anterior, se dejarán sin efectos las resoluciones por las cuales se suspendió el permiso sindical y se ordenará restablecer el permiso sindical otorgado en los términos de la Resolución No. DRH-0435 de 2003. Igualmente, se ordenará realizar la concertación para discutir el permiso sindical de conformidad con las normas vigentes y la Resolución R-321 de 23 de abril de 2015, expedida por el Rector de la Universidad del Cauca y por medio de la cual se reconoció el acta final de negociación colectiva de empleados públicos suscrita entre ASPU y la Universidad del Cauca, suscrita el 25 de octubre de 2013.

<sup>13</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-465 de 2009



### III. DECISIÓN

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cauca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

#### RESUELVE

**PRIMERO: REVOCAR** la Sentencia N° 124 del 23 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, por lo anotado en precedencia.

**SEGUNDO: TUTELAR** los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva y debido proceso de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU-, representado por el señor Pedro Hernández Castillo, y la señora Gloria Cecilia Arboleda, identificados con cédula 19.158.623 y 34.525.009, respectivamente; vulnerados por la Nación-Ministerio de Educación-Universidad del Cauca

**TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS** la Resolución Rectoral R-951 de 2014 expedida por el Rector de la Universidad del Cauca y Resolución Superior 024 de 20 de mayo de 2014 del Consejo Superior de la Universidad del Cauca.

**CUARTO:** Como consecuencia de lo anterior, la Universidad del Cauca, deberá dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta sentencia, restablecer el permiso sindical otorgado a la docente Gloria Cecilia Arboleda Fernández, en los términos de la Resolución No. DRH-0435 de 2003, hasta tanto no se realice nueva concertación entre la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU y la Universidad del Cauca.

**QUINTO: ORDENAR** a la Universidad del Cauca, que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, realice concertación con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU para otorgar el permiso sindical de la señora Gloria Cecilia Arboleda Fernández, de conformidad con las normas vigentes y el acta final de negociación colectiva de empleados públicos suscrita entre ASPU y la Universidad del Cauca, reconocida mediante Resolución R-321 de 23 de abril de 2015.

**SEXTO:** Remitir al Juzgado de origen para lo de su competencia.

**SÉPTIMO:** Notificar la presente providencia, según el Decreto 2591 de 1991.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

  
DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO

  
CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

  
NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ